

ESTE DIARIO

SE PUBLICA

POR SU TIPOGRAFIA A VAPOR

Calle del Cerrito 84

REDACCION Y ADMINISTRACION, CERRITO 84

DIRECTOR—JUAN ZORRILLA DE SAN MARTIN

AVISOS Y SOLICITADAS HASTA LAS 6 DE LA TARDE

EL BIEN PÚBLICO

DIARIO DE LA MAÑANA

SUSCRICION

Por un mes \$ 1 50
Un número del día 0 10
Un número atrasado 0 20

Almanaque
Viernes 4.—El Sagrado Corazón de Jesús, Santos Francisco, Carmelo y Saturnino.

SOCIEDAD DE S. VICENTE DE PAUL
Conferencia de Señoras

Se suplica a las personas piadosas que tengan disponibles prendas de ropa o calzado, se dignen remitirlos a la ropería de la Conferencia de Señoras, sita en la calle del Uruguay número 64.

Con ese pequeño desprendimiento se conseguirá cubrir la desnudez de infinidad de infortunados, cuyas necesidades no alcanzan a llenar la Sociedad, por mas que multiplique sus esfuerzos, a causa de su excesivo número.

Espera la Conferencia que las almas caritativas atenderán este pedido y se dignaran enviar lo sobrante, siquiera, de sus casas.

La Secretaria.

EL BIEN PÚBLICO

MONTEVIDEO, JUNIO 4 DE 1880

La guerra civil

La tempestad se cierne en los horizontes políticos de la Confederación Argentina. Los partidos se alistan para la guerra haciendo ayer de olor misterio y hoy mostrándose a la claridad del día con la espada desnuda.

Nos es imposible dejar de lamentar tal obcecación que hace olvidar la grandeza legítima otorgada a sus hombres públicos, que se muestran incapaces de dominar la situación. Si esta no toma un rumbo favorable, no solo se detendrá de improviso la marcha veloz del progreso de la Confederación, sino que desandará todo el camino avanzado. Su prensa lo comprende así, su comercio clama por la paz, y sin embargo las olas suben y la tempestad asoma y los caudillos políticos siguen y siguen atizándola.

El Presidente Avelleda, triste es decirlo, que se mostró pequeño ante los conflictos internacionales de su país, se presenta enano en medio de los conflictos de la política interior y al revés de Jerges, cuando había azotado las olas del mar, procura desde su orilla aplacar la tempestad con los discursos de Demóstenes. Ofrece la paz, dice que ella, es decir el porvenir de su patria, está en sus manos, y con cada día que pasa, ese porvenir se entenebrece mas y mas, el encono de los partidos sube de punto, se arman progresivamente y el choque parece inevitable.

El litigio de los hechos se desarrolla exactamente como si no hubiera un Tribunal político que dirima la contienda de los derechos, como si ese Tribunal no se hubiera convocado como acaba de suceder. El General Roca, a quien se acusa de ambicioso vulgar, se somete a él y rinde su espada ante sus decisiones. Tejedor, entre tanto, apela a la gastada superchería de poner en tela de juicio la legitimidad de sus decisiones y asume por consiguiente de hecho atribuciones superiores a la del Tribunal supremo llamado a conocer de estos asuntos, desde que pone por sobre sus fallos, los fallos de su opinión y de su partido. Y se llama al General Roca un ambicioso vulgar!

Si cuenta Tejedor con el gran árbitro de la situación que es la soberanía del pueblo, representada en la mayoría del Congreso nacional, por qué se muestra temeroso de sus dictámenes y se anticipa a dudar de su equidad? La sinceridad patriótica de su proceder y la legitimidad del título de sus ambiciones son sacrificadas, de esa manera por su propia conducta.

Se exigió al General Roca que abandonara su alto puesto de miembro del Gabinete de su país, y el General cedió su plaza a otro. Ya no le podía acusar de tener entre manos los recursos de la acción oficial puestos al servicio de su candidatura.

Hoy al hombre privado se le exige también que aparte la mano del pueblo que le señala como a él elegido en notable mayoría, y se le pone este dilema: «renuncie usted y renuncie yo. Renuncie el vencedor y el vencido de la vispera, Roca y Tejedor, es exigir como condición de una transacción que el uno abdique a la Presidencia futura de su país, y el otro a las simples ambiciones que le reatan a las columnas del poder.

Semejante solución importa la santificación del triunfo agresivo de las minorías que despoztan a las mayorías y con ellas a la soberanía del país, a la que le ponen, como al romano, este dilema terrible: la paz o la guerra.

La gran capital está onegocuada por el amor propio y dominada del individualismo provincial mas lamentable. Esa ciudad que podemos decir sin exageración que es la capital de Sur-América, tiene congestionado el cerebro y atenta en sus estravíos envolver a la noble, a la hermosa nación Argentina en el torbellino de la guerra civil. Los sucesos que ayer hoy nos comunica el telégrafo, son por demás alarmantes, pues son el desconocimiento completo del Gobierno de la Nación, son el guante arrojado al Poder supremo, más todavía, la guerra misma, un ataque al Ejército de línea, a quien le está encomendado el sosteni-

miento del orden interior y de la integridad nacional.

El Sr. Avelleda entre tanto permanece en el carro del Estado, sueltas las riendas del Gobierno que se las ha arrebatado el pueblo porteño, en una actitud más pusilánime y resignada que la de Luis XVI cuando fue sorprendido, huyendo de París, en una silla de posta.

Pero el estigmatizar el desvarío del Gobierno Provincial y sus adeptos, no es en manera alguna hacer votos por que surja el General Roca, ni hacer público testimonio de simpatías por este candidato. No es mas que reprobamos todo acto que riña contra el uso de las libertades públicas y la autonomía de las provincias, y desear que la ambición no sea motivo de la guerra, ni inmoladora de la paz.

Bien al contrario, y para asegurar esta, en gracia de la felicidad de la Gran República anhelamos que el General y candidato a la primera magistratura, elimine su figura de en medio de los partidos puestos en acción, para obligarlos a reconciliarse en el campo mismo que debía servir de teatro de sus luchas. Escusado es decir cuánto ganaría en nombrada y en la gratitud del pueblo, el bravo General, con este acto de desprendimiento.

El Club de La Paz ha lanzado una candidatura de reconciliación simpática para todo argentino y buen americano; la del ciudadano don Bernardo de Irigoyen. Ojalá fuese ese grande hombre de Estado el llamado a regir los destinos de la Confederación, y que los argentinos no se estermimen en la guerra intestina, que devora a sus propios hijos como Saturno, atendiendo antes bien a sus mas trascendentes é inminentes peligros exteriores.

La paz en la República Argentina, es una necesidad, mas que nacional, americana.

Artículo remitido

Hace unos días tomé la pluma para dar y también me paloteaba en el asunto de la iglesia del Cordon. A ello, aunque mas no fuese, me convidaba la especie echada a volar por La España de que yo, en representación del Sr. Soler, iba a causar al Juez del Crimen. La España daba esa noticia añadiendo despectivamente: *nunca falta un voto para un desdichado*; y si bien me agrada que se llame desdichado al Dr. Fein, no pude del todo avenirme a que me llamase La España *rotó* a mí, que hasta las narices guardo entera. De ahí mi arranque para escribir acerca de un asunto que parecía ya enteramente agotado.

Felizmente, un diario de la noche anunciaba que el desdichado iba a acabar de desdecirse; esto es, que el Dr. Fein, protagonista de este sainete, iba a dar a los ciertos documentos que le justificaban. Y mas felizmente aún, yo le di el consentimiento de poner por obra el propósito que me sugirió mi amable compatriota La España... denegado. Gasto de pagar los beneficios, y quise ir pacientemente los descargos del Sr. Juez del Crimen, bien así como él, no hace años, oyó los mios por espacio de algo mas de una hora.

Hoy acaba de darme: El Siglo y La Razón los contienen; y puedo, en consecuencia, sentarme *pro tribunali*.

Empieza el Dr. Fein por decir que, en virtud de una denuncia del Juez de Paz de la 7.ª sección, el Fiscal pidió que se sumariase al Sr. Cora del Cordon. Que así lo hizo, y al Cora se le pidió informe sobre el hecho denunciado. Que este lo dio, confesando en el haber bautizado algunos niños que estaban en peligro de muerte, pero que no estaban inscritos en el Registro Civil. Que examinada la respuesta al Fiscal, este pidió que se pasara a los libros parroquiales, para ver si, a mas de bautizados, los referidos niños habían sido inscritos. Que de acuerdo con el Fiscal, el Juez mandó a su Actuario para que verificase aquel exámen. Que el Cora, después de haber hecho ir y venir al pobre Sr. Fernandez, se negó a enseñar los libros. Que la causa pasó nuevamente al Fiscal. Que este pidió el uso de la fuerza pública si necesaria fuese, para efectuar la inspección decretada. Que, a pesar de eso, el Juez pidió permiso al Sr. Obispo, y que, negado por este, se decidió a hacer lo que hizo: cual es, presentarse, descender y ver, con esos propios ojos que se ha de comer la tierra, que los niños habían sido, no solo bautizados, sino inscritos.

Como era natural, al Dr. Fein le picó que alguien le haya dicho que trató de burlarse del Tribunal, envileciendo de conciencia lo que se propuso hacer, cuando ya el Tribunal no podía impedirlo. Y para deshacer ese cargo, que bien poco debe importarle a un juez que ha dado en su bursela a las barbas al Tribunal al menos una vez cada semana; para deshacer ese cargo, dice que la comunicación para el Tribunal fue remitida y entregada a un empleado del Tribunal de 2.º turno el día 18, siendo como la una y media de la tarde; mientras que la inspección con fractura no fue llevada a cabo sino el día 20 a las tres de la tarde. Esto se da de mojonones con lo que el escribano Castro anotó en la comunicación del doctor Fein: recibida, dice, el 20 de mayo del siguiente que asegura haberla recibido el 19 a las tres y media de la tarde, esto es, cuando ya no podía ser pasada a conocimiento del Tribunal.

Pero, en fin, esa es cuestión que puede ventilarla el doctor Fein con el señor Castro y su aguacil; para el caso, lo mismo da ocho que ochenta, y ante la conducta posterior del muy alto y respetado Tribunal, es indiferente que la responsabilidad del suceso le caiga al doctor Fein, solo él en suena del Tribunal, sobre cuyo lomo hace tiempo viene cabalgando.

La cosa depurada de todo lo accesorio, es la siguiente: Que el doctor Soler ha sido procesado, sin permiso ni notitia de la Cámara cuyo miembro es. Que, a petición del apoderado fiscal del Crimen, el coaccionado Juez de línea, con é inautorización del Tribunal, ha efectuado una inspección domiciliar en los papeles privados (esto que desde la creación del Registro Civil ya no son públicos) de un representante de la Nación.

Que no solo ha sido violada la inmunidad parlamentaria del doctor Soler, sino que lo ha sido también la del lugar en que los papeles se encontraban, exento por leyes no derogadas de toda fuerza o al menos de toda fuerza que no venga de un poco mas arriba, jurisdiccionalmente hablando, que el Juzgado del Crimen de 2.º turno.

Que, por último, como creo demostrar en un comunicado que hoy envío a El Siglo una acción pública que no ofende orden público ni vista de hechos de tercero, cual es la inspección que he en cura en libros que no son públicos ni tienen mas efecto civil que cualquier otro libro; una acción, digo, que la Constitución pone fuera del

alcance legal como reservada a solo Dios, ha sido materia de pesquisas por parte de un funcionario judicial; y de pesquisas practicadas con violencia, con fractura de puertas, con presencia de fuerza pública.

¿Se justifica todo esto con los documentos que publica el Dr. Fein?

Cada cual es dueño de sus opiniones, y yo no pretendo imponer a nadie la mía; pero si no he de ocultar lo que siento, diré que el Dr. Fein está muy lejos de quedar justificado.

En primer lugar, ni él ni nadie, puede arrojar a cumplir leyes abiertamente inconstitucionales; ni la disposición que vea a las Cursas inscribir los bautismos de aquellos niños que aún no están inscritos en el Registro Civil, puede eximir a un funcionario público de la responsabilidad en que incurre como infractor de la Constitución. No hay un solo constitucionalista que, al tratar de ciertos derechos, entre los cuales asigna todos los contenidos en el artículo 134 de la Constitución, no los declare superiores a toda ley. No hay ninguna Constitución democrática que no prohiba, explícita o implícitamente, legislar sobre leyes. En casos dados, declarado, por ejemplo, el estado de sitio, se permitirá la suspensión de esas garantías; podrá ser encarcelado un ciudadano sin auto de juez, se prohibirá la aparición de un diario, no se permitirá a grupos ni que las gentes salgan de su casa pasadas estas 6 u 8 horas. Lo que no autoriza ninguna constitución; lo que prohíbe la de este país en su artículo 134 y en todos los que se hallan incluidos en la misma sección que él, es que el estado precario se torne en permanente por ministerio de una ley ó de muchas leyes; que un Congreso ni una dictadura, ni ambos reunidos se vengán el día mas de su agrado dictando, por ejemplo, una ley que prohiba andar de 4 a cuatro por las calles, o somarse a los balcones de noche, o escribir cada cual el diario de su vida o anotar los gastos del mercado ó las conversaciones con sus amigos. Eso es lo que dice el artículo 134 de la Constitución al declarar *cerzas de la autoridad de los magistrados* a las acciones privadas que no ofendan el orden público ni perjudiquen derechos de tercero. Leyes dictadas en contravención con ese principio constitucional no obligan a nadie: ni a particulares, ni a funcionarios públicos; y si estos las ejecutan, y si para ejecutarlas, llevan la violencia al hogar del ciudadano, no quedan exentos de la responsabilidad como infractores de la Constitución, que les impone el artículo 116 de la que aquí dicen que nos rige.

Le es muy cómodo al Dr. Fein, decirnos a boca de jarro: *perjuicio un delito, culpa una ley*. Lo malo es que el supuesto delito es constitucionalmente imposible; y que la supuesta ley, nacida en las posteminas de una dictadura y obra de la misma supina ignorancia, está negada por la Constitución.

¿Para qué se los exige a los jueces un título profesional? ¿Para qué se los pide que gasten algunas decenas de pantalones, no contra los villanos de los ministerios, sino contra los pelados bancos de las escuelas, sino es para que sepan dar cuando la duda es necesaria y regular la aplicación de las leyes conforme a la que es piedra de toque para todas ellas? ¿Por qué, en fin, dice el Código Civil en su título preliminar, que los jueces dan cuenta a sus superiores de los defectos de la ley, sino es porque los considera con aptitudes para discernirlos? Y entre todos esos defectos ¿qué defecto mayor, qué causa mas razonable de impopularidad que la inconstitucionalidad de la ley que se les da por norma?

A un juez que abra por el polo de los criminales, creyendo que es inconstitucional el teje maneje del barbero; ¿le ha de faltar la voz, y se le acobarda el celo, y se le han de agotar la ilustración y la ciencia, y lo ha de reducir al ensañamiento, y lo ha de hacer el fervor por los hijos enclenques de las dictaduras, solo cuando de curas se trata? Pues qué ¿los curas no son ciudadanos? ¿no lo son menos, por ventura, que los presuntos criminales? Y si cuando se trata de ellos se anulan en nombre de la Constitución los reglamentos dictatoriales, ¿es posible que contra la Constitución prevalezcan aquellos cuando de curas se trata?

Dejo al lector todo comentario.

Pero aún puesto caso que la constitución no dijese lo que digo, excluyendo con su dicho lo que pretende decir la ley de Registro Civil en su artículo 37, todavía el Juez Dr. Fein apoyado en su solidismo Fiscal, habría incurrido en atropello por violación del Código de Instrucción Criminal.

Delito, según ha definido El Bien Público y según lo definen los tratadistas es toda infracción voluntaria, libre y maliciosa de una ley, que ordena o prohíbe algo bajo pena. Es, dice el Código Español y con el casi todos los americanos, «acoin con omisión voluntaria pensada por la ley».

Nosotros no tenemos un Código Penal, y la verdad es que la definición que del delito dan las partidas no nos sirve para malicia la cosa. Tenemos en cambio un Código de Instrucción Criminal que a pesar de ser obra del doctor don Laudelino Vazquez, tiene un artículo bastante regular, que dice a la letra:

«ARTICULO 13. Los actos u omisiones que no castiga expresamente la ley penal, no pueden dar mérito a ningún procedimiento.

Supuesto eso, preguntémosles al Dr. Fein y a su sin par Fiscal, por qué ley está pensada la contravención al art. 37 de la ley de Registro Civil. Les está, es cierto, prohibido a las Cursas inscribir las partidas de aquellos niños que previamente no se hallan registrados por los Juzgados de Paz. ¿Pero con que pena se les castiga si inscriben?

Si que me van a decir, ¿que entre dientes se lo dirán a sí mismos, que toda transgresión por parte de un funcionario público está pensada con multa en el art. 19 de aquella ley.

Pero yo les preguntaré a mí vez si las cursas son funcionarios públicos; y si aun caso de que lo fuesen, tendría ese carácter aún en sus actos no públicos en si ni en sus efectos, cual es la inspección de un acto suyo en uno ó en cien libros que no son registros públicos, puesto que la ley les niega ese carácter; y si, por último, los curas son de aquellos funcionarios a quienes se refiere el artículo 19.

Dice este: Mientras no se promulgue el Código Penal, todas las transgresiones de los funcionarios públicos que deben intervenir en la ejecución de esta ley, serán penados etc.

¿Querían decirme esos competentes Señores que parte se les asigna a las Cursas en la ejecución de esa ley? Y si no se les asigna ninguna, ¿cómo está que el artículo no va con ellos? Pero me basta con que esto punto sea materia de duda racional; me sobra con que pueda no ser interpretado con referencia a los Curas, para exigir en nombre de la justicia que no los sea aplicada, al menos hasta que la duda sea resuelta por los únicos que pueden interpretar autoritativamente la ley, es decir, por el Congreso Legislativo (artículo 12 del Código Civil).

La ley penal, dicen los autores, no es susceptible de extensión: se toma a la letra; y aun, cuando declinan los antiguos: *odia restringenda, favorabilia amplianda*.

Luego la ley de Registro Civil no impone pena, o al menos es bien dudoso que la imponga a los contraventores del artículo 37. Luego no castiga expresamente su contravención; y si no la castiga expresamente, no puede dar lugar a ningún procedimiento, si es que, tan luego por tratarse de curas, no ha dejado de regir el artículo 13 arriba trascrito, del Código de Instrucción Criminal.

Se me dirá tal vez que esa ley ha sido recientemente interpretada por el Gobierno adoptando y mandando que sea tenida como ley, cierta visita oficial del Sr. Vazquez Acevedo.

Y yo contestaré que ese proceder del gobierno ha sido inconstitucional y contrario al artículo 12 del Código Civil: que los gobiernos no interpretan sino que ejecutan las leyes; y que entre los actos inconstitucionales de jueces como de gobiernos, los curas, como cualquier otro ciudadano, tienen dos derechos: el de representación y el de resistencia.

Puede decir mas; y es que las leyes no tienen efecto retroactivo; y las penas, cuando agravan pena, menos. Y como las inscripciones efectuadas por el señor Cura del Cordon son de muchos meses anteriores a la interpretación del señor Vazquez Acevedo, estarían fuera de su alcance aun en el supuesto de que ese acto no hubiese sido herido de nulidad incurrables.

Con lo cual creo dejar bien asentada la responsabilidad en que tambien por este segundo concepto, ha incurrido el doctor Fein sometiendo a procedimiento una acción que, por el artículo 13 del Código de Instrucción Criminal, estaba exenta de él; así como por la Constitución lo estaba de ser materia de ninguna clase de ley.

Y satisfecho con la idea de que tal vez mis lectores queden persuadidos de que así existió en el caso un atropello, aún considerando al doctor Soler en el carácter de simple ciudadano, me prometo demostrarle los siguientes días que lo ha habido mayor todavía por razón de su inmundicia parlamentaria y por la del lugar en que el acto ha sido verificado.

Francisco Duró.

Revista de la Prensa

El Siglo recuerda el proyecto del ingeniero inglés Mr. Tosen para construir un puerto al Sur junto a Punta Brava, con cuyo motivo censura la paralización en que se encuentra un expediente que obtuvo la aprobación de la Cámara y que solo pende del informe que debe emitir el Sr. Jackson a quien se pasó para el objeto, y haciendo algunas alusiones respecto al Sr. Capurro que por cierto le honran, aconseja a aquel que haga lo mismo que hizo este si el proyecto en cuestión perjudica sus intereses; es decir: que se escuse de intervenir en él.

Como al insertar el colega los documentos referentes al asunto de la sacristía del Cordon, no hace comentario alguno, nos limitamos a dar cuenta de que los publica.

La Colonia Española hace una ensalada inefable de revista de la prensa, de una carta, de frases a lo Tio Diego, de calificaciones a lo sans fang y de puyas a lo ladino que con trabajo se puede meter en ella la cucharera.

Una madeja dice que es la Hacienda, cada vez mas enredada.

Que el Gobierno en vez de reducir gastos, quiere aumentarlos, sobre lo cual pone de manifiesto el parecer de La Nación, de El Telégrafo Marítimo, de La Tribuna Popular y del Diario del Comercio, asegurando que estos tres últimos dejan mal parado al inconveniente Ministerio de Hacienda.

Sigue a todo eso una carta de D. F. Vera en la que demuestra su imposibilidad de remitir al colega un artículo que le había ofrecido referente a la disposición tomada por el Ministro de Hacienda con relación a los aforos, y le mete mano a este en ella de un modo tan estúpido que no basta a suavizar tan rudo ataque el siguiente párrafo:

«Si seguimos así, quiero decir, tirando adelante el carro de desastros, entonces es en balde soñar con el día de salvación; a no ser que nuestro estado actual sea una contribución impuesta por Dios en expiación de nuestros pecados y en holocausto a la redención de nuestra alma o mejor dicho, del alma de la nación.

No sabemos hasta donde habría llegado el señor Vera en su ofrecido artículo, cuando en la carta que disculpa su envío es tan extenso. Sin duda sería un folleto capaz de ocupar dos decenas de cientos de números de La Colonia Española.

De buenas se ha librado.

Se entretiene luego con La France, con la Italia Nuova, con La Nación otra vez y con El Siglo y nosotros, dando por supuesto que los fuegos de nuestra batería están apagados en el asunto atropello-Fein, no sin demostrar al colega decano que está atortolado. ¿Pues no ha de estarlo?

En cuanto a lo de nuestros fuegos hoy rectificaré si quisiera; y con esta última cucharada, dios fin a su bodrio que nos parece algo indigesto.

Pero esa cualidad la temple algo con la continuación de los antecedentes de Artigas. Bien, bien...

Contesta La Nación a El Telégrafo Marítimo, al Diario del Comercio y a los demás colegas que se oponen al aumento de los derechos de Aduana queriéndoles convencer de que son infundados sus temores y de que no tratan el asunto con la lógica necesaria en toda discusión.

Apostamos diez contra uno a que no piensan ellos lo mismo.

A Patria, transcribe el proyecto de ley sobre aumento de derechos, con el cual está conforme y promete publicar un artículo en apoyo del tratado de comercio que ha concebido entre el Brasil, Estado Oriental, República Argentina, etc.

Veremos lo que sale de su lábio.

Creíamos que La España se había olvidado ya de aquella monomanía que le dio por el armamento del pueblo, sobre el que dió a luz varios artículos, y nos equivocamos de medio a medio. Hoy abre el chiquero y lanza al redondel su

cuarto cornúpeto que lleva por mote REFORMA NECESARIA: de muchas libras boyante, retinto bragado, bien puesto aunque algo celete yéndose al bulto y creciéndose al hierro, dá mucha faena a los muchachos (el ejercito) para pararle los pies, después de lo cual, se hace pegajoso recargando mas de lo que es menester; pero terminada la lidia, observa el público que dejó a toda la caballería en pie y en la arena ningún difunto.

El que há hambre, de pan trata: Su otro editorial empieza asegurando que vé y acaba afirmando que tiene los ojos fijos en su patria. Nosotros estábamos casi seguros de que en la redacción de La España eran todos ó míopes ó de vista cansada; pero no es así, puesto que ven, y tanto ven, que ven lo que no existe. Ven una mayoría inmensa en el partido posibilista: ven a los diarios conservadores tanto de Madrid como de provincias despechados y disimulando mal la impresion que les ha causado el manifiesto de aquel partido. (Que penetración de vista! hasta ven a mas de mil quinientas leguas; y ven por último a muchos personajes políticos de origen monárquico convencidos ya de que es imposible conciliar la monarquía española con la libertad. (Hasta qué pensamiento, hijo, hasta el pensamiento!)

En cambio de tanto como vé el colega, no sabe de la misa la media. Con decir que el partido posibilista es tan flamante que no data mas que desde el año pasado y que se formó por las desavenencias surgidas entre los republicanos de la Camarilla Castelar y comparsa, basta para demostrar la importancia de esa doble vista escocesa de que hace alarde el colega heterodoxo. El partido republicano en España es tan exiguo desde que estuvo en el poder y dió muestras de su incapacidad, que tiene sin cuidado a los monárquicos; con que si el posibilista es una rama desgajada de aquel, calculen ustedes.

La Tribuna Popular no deja un ápice en cuanto ha dicho con relación al aumento de derechos de Aduana, antes por el contrario, enriquece algo mas que lo corrobora y aprieta.

Al Ferro-Carril con el colega!

Lo mismo le ocurre al Diario del Comercio en su primer editorial é igual destino le damos.

De los perjuicios que sufrirán los accionistas de la Compañía Salteña con la venta en el plazo de quince días del activo y pasivo que resulta de aquella liquidación, se ocupa en el segundo.

Y por el tercero dá publicidad insertándolo al artículo de El Siglo que se refiere a el proyectado puerto del ingeniero Mr. Tuson.

A El Ferro-Carril le creemos hoy algo exagerado en sus calificaciones, cuando refuta las opiniones de El Telégrafo Marítimo relativas a los derechos de Aduanas.

Antes que nadie, hemos criticado nosotros a grandes voces que los extranjeros se mezclen en nuestra política, y aun recordamos una de nuestras frases: *quien tal hace, dijimos, se mete en la casa ajena y la allana sin permiso de su dueño*. Estamos de acuerdo con la excepción que hace el colega de los españoles que viven y echan raíces en este país; pero aun no parece que de biera hacerse otra: Conocemos españoles ocupados en la prensa y que en ella han publicado artículos enteramente conformes con su parecer y el nuestro, dedicándose ya a la parte literaria, ya al progreso y ya también a otros asuntos ajenos a la política y útiles para todos. Estamos seguros de que esos españoles tambien los escúptea el colega de su anatema y por eso mismo nos apresuramos a darles una satisfacción en su nombre, cuya libertad esperamos nos dispense.

En otro editorial contesta el colega al Diario del Comercio con razones atendibles sus artículos de oposición al aumento de derechos de Aduana.

Tambien se ocupa El Telégrafo Marítimo del puerto del Sur.

Seccion Oficial

Ministerio de Relaciones Exteriores.

DECRETO

Montevideo, Junio 3 de 1880.

El Presidente de la República decreta: Art. 1.º Nómbrase Cónsul de la República en Concordia al ciudadano don Fortunato Requena.

Art. 2.º Espídase la patente y demás documentos, comuníquese, publíquese y dese al R. C.

VIDAL.

J. REQUENA Y GARCIA.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

DECRETO

Montevideo Mayo 3 de 1880.

El Presidente de la República decreta: Art. 1.º Exonérase al Sr. D. Esteban Maria Moreno del cargo de Cónsul de la República, en la Concepción del Uruguay, dándosele las gracias por los servicios prestados en el desempeño de ese puesto.

Art. 2.º Nómbrase para subrogarle al ciudadano D. Meliton Lascano.

Art. 3.º Espídase la patente y demás

documentos comuníquese, publíquese y dese al R. C.

VIDAL.

J. REQUENA Y GARCIA.

Ministerio de R. Exteriores.

DECRETO

Montevideo, Junio 3 de 1880.

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. 1.º Apruébase el nombramiento de Vice-Cónsul en Oloron hecho por el Consul General respectivo en la persona de D. Pablo Bouderon.

Art. 2.º Espídase la patente y demás documentos, comuníquese, publíquese y dese al R. C.

VIDAL.

V. REQUENA Y GARCIA.

Ministerio de Hacienda.

DECRETO

Montevideo, Junio 2 de 1880.

Vacante el cargo de Procurador Fiscal en el Departamento de Minas, el Presidente de la República, decreta:

Art. 1.º Nómbrase Procurador Fiscal en el referido departamento, al ciudadano D. Gregorio L. Castro.

Art. 2.º Comuníquese, publíquese y dese al R. C.

VIDAL.

JUAN PEÑALVA.

Jefatura del Departamento de Tacuarembó.

San Fructuoso, Mayo 25 de 1880.

Exmo. Sr. Ministro de Gobierno; don Eduardo Mac-Eachen.

Exmo. señor:

Pongo en conocimiento de V. E. que a las doce de la noche del día de ayer, el guardia civil Marcelino de los Santos que se hallaba de servicio en la calle General Flores, sintió algunos gritos en una casa y con tal motivo, creyendo fueran ladrones, se apersonó a ella y se encontró con un individuo de apellido Langrane, que armado de un garrote daba gritos descompasados.

El sereno quiso apoderarse de él, pero se internó dentro del sitio, diciendo que de

